



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN  
SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicado: 05001-31-03-008-2017-00744-01

SALVAMENTO DEL VOTO

Del intitulado de la acción, pero sobre todo de los hechos de la misma, es pertinente tener presente que la fuente de responsabilidad es el contrato de transporte que se describe en el hecho 1º de la demanda<sup>1</sup>, por lo que estando ante una convención, el deber del transportador consistía en; “... *el transporte de personas a conducir las sanas y salvas al lugar de destino.*”, tal como lo dispone el artículo 982 C. de Co., sin que pudiéramos irnos por la senda extracontractual.

Ahora, ¿qué se definió sobre el particular en la audiencia inicial, específicamente en el acápite de fijación del litigio?; la verdad, esa

---

<sup>1</sup> Del artículo 824 del C. de Co., “Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad.”, donde la convención de marras no requería solemnidad alguna, además ello no es punto de debate.

oportunidad fue desaprovechada, pues viendo la correspondiente diligencia, ahí el actor iteró en cuanto a la responsabilidad demandada considerando los fallos contravencionales y penales, y que solo era necesario entrar a tasar perjuicios. El *a quo* no recabó sobre los hechos que se tendrían por probados y el tipo de acción demandada; aunque el accionado sí indicó que el asunto era del orden contractual y que en esos términos ejercería su defensa.

Frente a lo anterior, el Director del proceso, mutis por el foro, perdiéndose una valiosa oportunidad para tener claridad en el debate y precisarse, aún más, lo indicado en el escrito introductor.

Es decir, sin hallar precisión alguna en tan valiosa diligencia, nos toca centrarnos en la demanda, y en la misma, insisto, de los hechos y de la formulación inicial, que hace parte del libelo, lo que se demandó fue por “Responsabilidad Civil Contractual”. Así se dijo, sin que el profesional del derecho variara ese punto en la fijación del litigio. Es más, el poder también se dio en ese sentido.

En esos términos, con el mayor respeto, creo que no había nada qué interpretar. Por lo mismo, la responsabilidad del transportista estaba en los términos del artículo 982.2 del C. de Co., por cuanto su deber “*En el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino.*”, lo cual debe verse en armonía con el artículo 1003 del mismo ordenamiento, así como también en artículo 1005 ibídem, pues se estaba transportando a un menor de edad, punto al que volveré posteriormente.

Entonces, si estamos frente a un contrato de transporte de personas, pues las normas aplicables para ese pacto comercial según el artículo 2 del C. de Co., son primeramente las propias del correspondiente ordenamiento, donde su artículo 993 deja en claro que, *“Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos años.”*.

Sin embargo, no puede perderse el norte que en este caso el pasajero, y que contrató el transporte, era un menor de edad, quien para la fecha del accidente, 17 de enero de 2013, tenía 16 años y 5 meses, pues su nacimiento fue el 17 de agosto de 1996, por lo que en virtud del artículo 2530, ahora sí del C.C., la prescripción se tiene como suspendida en su favor, tomando tal condición hasta el 17 de agosto de 2014, fecha en que se hace mayor de edad.

Si lo anterior es así, y descontando el tiempo entre la solicitud y la conciliación entendida esta como requisito de procedibilidad, como ello se surtió entre el 24 de noviembre de 2015 y el 9 de diciembre de tal año, y la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2017, indefectiblemente el evento extintivo alegado se hubiera consolidado.

Sobre el mencionado evento extintivo, hay más, así asumiéramos la senda de la responsabilidad aquiliana prescindiendo de la legislación mercantil, al remitirnos al estatuto civil, el inciso 2º del artículo 2358 del Código respectivo, señala; *“Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto”*, tiempo este que transcurrió el 17 de agosto de 2014 al 18 de diciembre de 2017, así se descuenta el

menos del mes que duró el trámite de la conciliación previa<sup>2</sup>. En todo caso, debió considerarse que la prescripción fue alegada (artículo 2513 C.C.).

De otro lado, llamo la atención que vía interpretación, sobre todo cuando había claridad, ella no puede ser tan amplia, pues las normas del contrato de transporte en términos generales favorecen al porteador, pues en su favor está que lo lleven sano y salvo, por lo que si pasamos a otro régimen, se le exigirían requisitos axiológicos adicionales que harían más difícil su situación, además en una etapa de economías abiertas, los empresarios de ese ramo se verían afrontados a una inseguridad jurídica.

Cordialmente:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Magistrado

---

<sup>2</sup> Según el artículo 21 de la ley 640 de 2001, “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que ese trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”